

Desde la primera década del siglo XXI, y por un lapso de 18 años, hubo en México una etapa de aplicación sistemática de políticas antipopulares y antisociales, tanto durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), como con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder. En esta etapa, dichas políticas se fueron encajando en la sociedad, no sin agresividad, por medio de las reformas estructurales más neoliberales de todo el proyecto. El voto útil promovido por grupos de ciudadanos en aquel 2000 de la alternancia, que favoreció el acceso del PAN al poder, no tuvo los efectos de democratización que se deseaban, sino efectos contraproducentes. El proyecto que impulsaron estos gobiernos tuvo graves consecuencias en el desmantelamiento de los sindicatos menos heterónomos, en la escalada de violencia sin precedentes en todo el país, en el impacto directo que sufrió la seguridad de los ciudadanos y sus familias, en la muerte de decenas de miles de hombres y mujeres, en la persecución incansable de organizaciones sociales y la criminalización de la protesta, y en el sostenimiento del fraude electoral como mecanismo de reproducción del poder de las elites, que desmoronó la endeble edificación de la democracia electoral construida años antes con grandes esfuerzos y sacrificios personales. Los respectivos fraudes en las elecciones del siglo XXI, al estilo de los peores tiempos priistas, se llevaron a cabo con la finalidad de evitar por cualquier medio que un movimiento popular y antineoliberal llegase al poder; por otro lado, el decaimiento del zapatismo durante el periodo 2012-2018 lo colocó en una posición de debilidad para enfrentar la eternizada agresión del Estado en términos tanto políticos como militares.

Los años 2010 y 2011 marcaron un partea-guas en las características e intensidad de los movimientos. A partir de 2012, el PRI abrió una nueva transición política. Ya nadie con una lógica razonable hablaba de transición a la democracia, que había sido el tema fundamental en la década de los

noventa. No obstante, un nuevo ciclo de protestas se abrió con la campaña electoral de 2012, desde el movimiento #Yosoy132 hasta la indignación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La estructura de oportunidad política cambió, así como la percepción que los actores tenían al respecto.

El fuerte impacto regresivo en la clase trabajadora y los sectores populares en los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, a partir de las reformas estructurales que se impulsaron, ha sido neurálgico para el sistema. No obstante, la respuesta social, aparentemente, no fue suficiente, a pesar de que en las postrimerías de las elecciones de 2018 la ciudadanía se volcó hacia el proyecto de nación que ha venido representando la salida anti-neoliberal a la crisis.

A partir de la experiencia del movimiento #YoSoy132, y en el marco de los movimientos que surgieron en otras partes del mundo, como Occupy Wall Street en Estados Unidos, el Movimiento 15-M en España y la Primavera árabe (Castells, 2012; Turner, 2012), por nombrar sólo unos cuantos, la participación, la construcción de nuevos espacios de debate público y el uso de las redes sociales digitales se convirtieron en referentes básicos de muchos investigadores para explicar las nuevas formas de hacer política y construir resistencias a procesos como el de la criminalización de la protesta, o para entender la liga con los repertorios de la movilización (Rovira, 2012; Cotarelo, 2011; Espino, 2014; Treré, 2014; Castillo, 2014).

En este marco contextual se sitúan algunas dimensiones analíticas que fueron retomadas en los estudios sobre la relación entre ciudadanía y lucha social. Un primer aspecto permanente, que se presenta como dificultad en los movimientos sociales mexicanos, es su fragmentación. Desde una postura más o menos pragmática, se ha considerado que las demandas particulares son lo que empuja a los individuos a la movilización. Sin negarlo, debemos